

### **Pasados que siguen sin pasar**

- La historia está siempre en revisión y reescritura, pues se interpreta el pasado según el presente.

En cualquier sociedad los enconos políticos son fenómenos de larga incubación y duración. Ello se puede ver en dos actos recientes, motivados por hechos ocurridos hace 46 y 42 años respectivamente, en el contexto de la “guerra sucia”; el intento de secuestro en Monterrey por cinco jóvenes integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23C), que resultó en el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada y el arresto y tortura en Culiacán, por militares y policías, de Martha Alicia Camacho y de su esposo. Martha Alicia, torturada, parió en el proceso y sobrevivió, su esposo no.

A propósito del aniversario del asesinato del más importante empresario riomontano de entonces, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, Pedro Salmerón, publicó en el Facebook institucional que quienes intentaron el fallido secuestro, fueron unos “valientes jóvenes”. La reacción al calificativo fue instantánea, pues para un poder económico como el Consejo Coordinador Empresarial “no es valiente quien se escuda en la violencia como vía de cambio” y exigió a Salmerón disculparse, luego, a iniciativa del PAN, el congreso de Nuevo León lo declaró persona non grata. Al final, el presidente de la República aceptó la renuncia de Salmerón, pero sin regatearle méritos como historiador.

En contraste, en el Centro Universitario Tlatelolco, de la Ciudad de México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a nombre del Estado mexicano, pidió disculpas a la Sra. Camacho por la tortura a la que fue sometida y por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de su esposo, ambos miembros de la LC23S. Al tomar la palabra, quien fuera militante de la izquierda armada recalcó que sus viejos compañeros fueron no sólo valientes sino portadores de valores contrarios a la desigualdad y a la corrupción en que vivía el país.

La disculpa pública del gobierno se hizo en cumplimiento de una resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y como parte de un... Alejandro Encinas, requiere reconocer las prácticas contrainsurgentes ilegales del Estado y “obligarnos, no sólo a hacer una reflexión profunda, sino también a reescribir nuestra propia historia”.

En realidad, la historia está siempre en proceso de revisión y reescritura, pues cada época y grupo social reinterpreta el pasado según su situación presente. Ahora bien, el ritmo de la revisión y sus contradicciones se acelera en los periodos de cambio y confrontación de proyectos, como es el actual.

En tales circunstancias, la reconciliación vía la interpretación histórica es difícil. Y es que se trata de un choque de intereses como de valores, y en este último campo hay incompatibilidades insalvables. Para muchos, Eugenio Garza Sada era la quintaesencia del hombre de acción, el emprendedor, el constructor. Estaba a la cabeza del Grupo Monterrey, grupo surgido en el porfiriato y en exitosa expansión. Se trataba de un capital muy fuerte, nacionalista, constituido alrededor de cuatro subgrupos –Cuauhtémoc, Alfa, Vitro y Cydsa-- que a su vez tenían intereses en más de un centenar de empresas, y estaban en el corazón de la parte más moderna del capitalismo mexicano.

Para el grupo industrial, sólo la gran empresa privada podría modernizar al país y lo haría si el Estado jugaba su papel de garante del control social, (Matilde Luna en Julio Labastida {comp.}, Grupos económicos y organizaciones empresariales en México, Alianza Editorial, 1986). El proyecto de la LC23S, formada en 1973, era diametralmente opuesto. Desde su condición social –clase media y popular-- y visión, tras la represión del 68 y del 71, solo el socialismo y la vía armada harían avanzar los intereses mayoritarios. Supusieron que el secuestro del representante del gran capital permitiría canjearlo por sus compañeros presos y obtener fondos para llevar adelante su proyecto.

La LC23S, perseguida, se disolvió en 1983. El proyecto empresarial se mantuvo, pero sin llegar a ser la alternativa que dijo querer ser. Como el pasado nunca pasa del todo, lo que corresponde ahora es asimilarlo constructivamente y convivir en un marco de tolerancia pese a nuestras diferencias en valores y objetivos.

<b>COLUMNA DE RICARDO RAPHAEL. Septiembre 30 del 2019</b>
---

### **EU esconde información sobre Ayotzinapa (II)**

No es por impericia ni estupidez que a cinco años de la tragedia de Iguala el caso siga pendiente. La explicación frente a la tardanza radica en la magnitud de la red de complicidades que este caso exhibe, todavía con impunidad.

Para el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo prisa en refutar la consigna de las marchas que gritaban “fue el Estado”, porque sus operarios traían prisa en el cuerpo para minimizar la desaparición de los 43 normalistas.

Sin embargo, a cinco años de la tragedia no es posible esconder la magnitud de la red criminal responsable de ese episodio. La flecha que surcó aquella noche del 26 de septiembre de 2014 arrojó luz sobre una maraña que vincula a las autoridades de varios municipios, al gobierno estatal, a funcionarios federales, al Ejército, a empresas transportistas privadas, a funcionarios de la Procuraduría General de la República, a muchos periodistas, a líderes de opinión, a una organización criminal cuyo mando radicaba en los Estados Unidos y también a agentes del gobierno de ese país.

Después de un lustro de investigaciones, hay evidencia sobre cada tramo perteneciente a esta extensa conspiración criminal: policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzucó y Mezcala participaron en el operativo de desaparición forzada. Ellas contaron presumiblemente con el apoyo de presidentes municipales, entre ellos José Luis Abarca de Iguala y César Miguel Peñalosa Santana, de Cocula.

Se sumaron al operativo para recuperar los autobuses de pasajeros cargados de heroína, la policía del estado de Guerrero, la policía ministerial adscrita a la PGR y también la Policía Federal.

Cabe sospechar que, igualmente, al menos por omisión, las Fuerzas Armadas fueron cómplices de lo sucedido... La Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón, obstruyeron las investigaciones a partir de una teoría falsa del caso y un cierre prematuro de las pesquisas.

Son esas autoridades las principales responsables de que hoy estén libres decenas de presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. La obtención de confesiones por medio de la tortura, así como la pobreza de la evidencia científica presentada ante los jueces, pudieron haber sido, desde el principio, estrategias maquinadas para liberar a los perpetradores y así evitar que se convirtieran en delatores.

Porque se trata de una red criminal que supera las fronteras del país, hoy sabemos que las verdaderas cabezas de la organización responsable de la tragedia de Ayotzinapa radican en los Estados Unidos. E, igual y como está sucediendo con sus contrapartes mexicanas, allá también los jueces tienen contemplado liberar a la cúspide de la pirámide.

Así como Murillo y Zerón ocultaron información, la DEA y los tribunales de Chicago escondieron material clave relacionado, no solo con la desaparición de los normalistas, sino aquella referente a la estructura, los movimientos y la dimensión de la red gobernada por Pablo Vega, desde Illinois.

Resulta evidente que el patrón utilizado para proteger a la organización Guerreros Unidos es tan recurrente en Iguala como en Chicago.

Para las autoridades de ambos países la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa fue lo de menos. La cuestión todo el tiempo ha sido minimizar, ante la opinión pública, el tamaño del gigante criminal.

Vale insistir que esta estrategia ha contado con aliados muy leales desde los medios de comunicación, quienes, todavía hoy, abrazan las peores mentiras con una necedad tan sospechosa como exaltada.

Si, como dice el refrán, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, la verdad en el caso Ayotzinapa podría ser revelada solamente si se lograra explicar por qué el gobierno de los Estados Unidos ha guardado con sospechoso celo información

clave a propósito de las cabezas de la organización criminal dirigida por Pablo Vega, y más que todo, sobre sus contrapartes mexicanas.

En el mismo sentido tendría que resolverse otra parte de la ecuación: la compulsiva obsesión de los titulares de la antigua PGR, en particular de la SIEDO, por encubrir información relativa a los Guerreros Unidos, a su modus operandi y a las autoridades que, por decenas, se hallan en la nómina de esa empresa criminal.

La invención de la mentira sobre los jóvenes cremados en el basurero de Cocula se realizó con un propósito deliberado: mantener la macro red criminal intacta, después de la tragedia...

**ZOOM:** Cabe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logre descubrir el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Eso permitirá obtener justicia. Sin embargo, el principio de no repetición obliga a desenmascarar a todos y cada uno de los cómplices de la red más importante de tráfico de heroína que todavía hoy cruza desde México hacia los Estados Unidos.